

SOFÍA SEBASTIÁN

Perú: un régimen atípico, un futuro incierto

La decisión del presidente Alberto Fujimori de convocar nuevas elecciones, su renuncia a ser candidato y la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional han abierto muchos interrogantes para el futuro de Perú y un proceso de incertidumbre y desafíos. El desarrollo de una transición democrática estará condicionado por las características del régimen de Fujimori, apoyado en un sistema de gobierno centralizado y personalista que funciona de acuerdo con una red clientelista no institucionalizada. La apropiación de los principales mecanismos y recursos del Estado y de los medios de comunicación, junto con la falta de institucionalización de las estructuras paralelas de poder, como los partidos políticos, hacen necesaria una reestructuración del sistema de gobierno.

Sofía Sebastián es licenciada en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, Experta en Información Internacional y Países del Sur y analista del CIP. Este texto forma parte de un estudio realizado en Perú

El régimen de Fujimori ha suscitado muchos interrogantes académicos respecto de su naturaleza, a medio camino entre un sistema autoritario y una democracia. Perú responde al modelo de países que, caracterizados por la existencia de un Estado débil, se construyen sobre estructuras de poder fuertemente centralizadas, poco institucionalizadas y que practican un modelo de gobierno autoritario. Normalmente estos sistemas se dotan de Constituciones formales que les otorgan cobertura legal y legitimación internacional.

Democracias formales, grises, delegativas, *iliberales*, democracias de baja intensidad, pseudodemocracias, dictaduras blandas, *democraduras*... son algunos calificativos que se han aplicados a estos regímenes, que se desarrollan a partir de una situación de fuerte crisis económica y social. A esta condición coyuntural se suman problemas estructurales como la debilidad del Estado, incapaz de responder satisfactoriamente a las necesidades de la sociedad.

La característica principal de estos regímenes es la aparición de figuras "mesiánicas" que salvarán el país del caos en el que se encuentra.¹ Se desarrolla una estructura de poder que aumenta las competencias del presidente en detrimento de otras instituciones, como el Congreso y el poder judicial. Se elimina cualquier estructura de poder que pueda hacer sombra al líder, aunque se contempla la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas. Alberto Fujimori, en las elecciones de 1990, y los ex presidentes brasileño y argentino Collor de Mello y Carlos Menem, entran en esta definición.

Pero el sistema político instaurado en Perú tras el golpe de 1992 evolucionó hacia una forma particular de régimen, con una estructura cada vez más claramente autoritaria.² La reelección de Fujimori por amplia mayoría, en las elecciones de 1995, llevó a muchos autores a pensar que había reconducido el sistema hacia el terreno de las democracias con adjetivos. Sin embargo, es necesario profundizar en las características de las elecciones y cuestionar el sistema político en que se desarrollan para conocer la capacidad de la oposición de competir libre y justamente en elecciones nacionales. Para McClintock, "la clasificación apropiada para Perú (de 1995 en adelante) es de autoritario y no de democracia delegativa, pseudodemocracia o democracia con cualquier otro adjetivo (en donde se vislumbra la celebración de elecciones libres y justas)".³

Los analistas peruanos se han mostrado más proclives a ponerle la etiqueta de autoritario a este régimen. Cotler lo ha definido como un régimen típicamente autoritario, mafioso y patrimonial.⁴ Ricardo Soberón, como un sistema de coopta-

¹ Guillermo O'Donnell, "Delegative Democracies?", *Journal of Democracy*, nº 5, 1994. Esta figura mesiánica ha recibido el nombre de "outsider" en Julio Cotler, "Crisis política, 'outsiders' y democraduras: el fujimorismo", Carina Perelli, S. Picado y D. Zovarro (comp), *Partidos y Clase Política en América Latina en los 90*, IIDH-CAPEL, San José, 1995, y "nuevos caudillos" en Carina Perelli, "Backwards into de Future? The New Caudillos in the Framework of the Retreat of the State in South America", Peitho, Montevideo, Documento de Trabajo nº 84, 1992.

² Juan J. Linz en "Una teoría del Régimen Autoritario. El Caso de España" (en Manuel Fraga y Salustiano del Campo, *La España de los 70*, Moneda y Crédito, Madrid, 1974), define los regímenes autoritarios como "sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable, sin ideología rectora o complicada, pero con mentalidades propias, sin movilización extensa o intensa, salvo en algunos momentos de su desarrollo, en los que un líder, o de vez en cuando, un pequeño grupo, ejerce poder dentro de parámetros formalmente mal definidos pero que también son bastante predecibles". No obstante esta definición, dados los parámetros que funcionan en el actual sistema internacional, los nuevos regímenes no democráticos revisten elementos de democracia representativa con elementos autoritarios. Las clásicas características señaladas por Linz en los años setenta, aun siendo operativas para algunos regímenes autoritarios, pueden no ser aplicables en estos casos aunque sí se les puede considerar regímenes autoritarios. Para McClintock, (ver nota siguiente) la característica que define a un sistema autoritario respecto de una democracia con adjetivos es la capacidad que tiene la oposición de participar en elecciones libres y justas.

³ Cynthia McClintock, "¿Es autoritario el Gobierno de Fujimori?", Fernando Tuesta Soldevilla, *El Juego Político*, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1999.

⁴ Entrevista con Julio Cotler, 4 de septiembre de 2000.

ción político, económico y social, apoyado en las Fuerzas Armadas, cooptadas a su vez por el Servicio Nacional de Inteligencia.⁵ Fernando Rospigliosi lo califica como una dictadura personalizada y no institucionalizada.⁶

El régimen de Fujimori evolucionó desde una democracia con adjetivos (con estructura de poder centralizada y personalista pero bajo unos límites formales) hacia formas de autoritarismo personalizado a partir del autogolpe y, sobre todo, a partir de 1995, cuando quedó patente su voluntad de mantener las estructuras de poder. Si bien no responde estrictamente a las características de los regímenes autoritarios clásicos, debido a la existencia de una Constitución que formalmente regula la vida política del país, puede considerarse como un régimen patrimonial y autoritario.

La coyuntura política de Fujimori

La situación de Perú, a finales de los años ochenta, era de profunda crisis social, económica y política. Los Gobiernos de Fernando Belaunde Terry y Alan García acrecentaron la inestabilidad del sistema y su pobreza institucional, y dejaron al país en una de las peores crisis económicas de su historia. El PIB cayó un 20% en los últimos años del mandato de García y la tasa de inflación alcanzó el 2.776%. Las recaudaciones del Estado —el 4% del PIB— eran ridículas para hacer frente a la crisis y dar respuesta a las demandas de la sociedad.

La corrupción del aparato político generó sentimientos de rechazo y desconfianza entre la población. Las esperanzas depositadas en el régimen democrático quedaron frustradas y decayó el prestigio de instituciones como los partidos políticos. La subversión, que sacudió al país con una de sus peores políticas de terror, la violación de derechos humanos y el problema del narcotráfico, agravaron la inviabilidad del Estado y la crisis de gobernabilidad. A esta situación coyuntural se unía un problema de naturaleza estructural: la incapacidad crónica del Estado para consolidarse institucionalmente e integrar a toda la sociedad en un proyecto político.⁷

En esta situación de ingobernabilidad e ineficacia institucional la consolidación democrática era una tarea muy complicada. Así se dieron los factores para la aparición y victoria del modelo Fujimori. Las elecciones de 1990 marcaron un punto de inflexión en la política peruana. Frente a un APRA totalmente deslegitimado, se presentaba un discurso neoliberal liderado por Mario Vargas Llosa. La opción radical quedaba en manos del grupo armado ultraizquierdista Sendero Luminoso. El discurso populista de Fujimori, que propugnaba acabar con la corrupción, con la inflación y el terrorismo, y que se proponía luchar contra la pobreza, caló profundamente en la sociedad y en la segunda vuelta logró desbancar a su contrincante, Vargas Llosa.

⁵ Entrevista con Ricardo Soberón, 2 de septiembre de 2000.

⁶ Entrevista con Fernando Rospigliosi, 4 de septiembre de 2000.

⁷ Julio Cotler, *Drogas y Política en el Perú*, IEP, Lima, 1999. Ver también Seing y Monge, *La Crisis del Estado Patrimonial en el Perú*, IEP y Universidad de Miami, Lima, 1988.

*El discurso
populista de
Fujimori, que
propugnaba
acabar con la
corrupción,
con la
inflación y el
terrorismo,
y que se
proponía
luchar contra
la pobreza,
caló
profundamente
en la sociedad*

Los primeros años del Gobierno de Fujimori se centraron en dos políticas populares: en primer lugar, disminuyó radicalmente la inflación y aumentó la producción; en segundo, llevó a cabo una acción decidida y enérgica contra los movimientos guerrilleros y terroristas, que pronto dio sus frutos con la captura de los principales activistas de Sendero Luminoso y la resolución de la crisis de la embajada japonesa en 1996, que puso fin a las actividades del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Estas medidas le otorgaron un fuerte apoyo popular que le permitió, en 1992, llevar a cabo el denominado “autogolpe” —aunque después devolvió la legalidad constitucional con una Constitución, aprobada en 1993, que otorgaba fuertes poderes al presidente— y volver a ganar las elecciones de 1995 con una abrumadora mayoría.

Se pusieron así las bases de un Estado estrictamente liberal, siguiendo la gran mayoría de las recetas que Vargas Llosa había defendido durante la batalla electoral. Simultáneamente, se fueron construyendo las estructuras del modelo político de Fujimori.

La apropiación del Estado

Las claves para analizar la estructura de poder del régimen de Fujimori son tres: las alianzas estratégicas que tejió alrededor suyo; la apropiación de las estructuras y recursos del Estado y de los medios de comunicación, que quedaron a su servicio personal, y la desinstitucionalización simultánea de todas las estructuras de poder, entre ellas los movimientos de oposición.

Una característica de la política de Fujimori ha sido su estilo, personal y centralizado. La Constitución de 1993, aprobada por un estrecho margen, puso los recursos del Estado al servicio del presidente, dando cobertura legal a su autoritarismo (Cotler lo ha llamado dictadura legal).⁸ El presidente asumió buena parte de las funciones del Gobierno. Muchas decisiones se adoptaban mediante decretos, relativizando en la práctica el poder del Parlamento. Las atribuciones del legislativo, que quedó reducido a una cámara con sólo 120 representantes, fueron drásticamente recortadas.

El poder judicial fue sometido al Ejecutivo, que elegía a las principales autoridades de la judicatura y del sistema electoral. La Constitución fortaleció el desequilibrio entre los principales poderes del Estado, favorecido por una práctica política autoritaria y poco legalista. El proceso de reforma del sistema judicial, aunque positivo para ganar eficacia y reducir los casos de corrupción, se convirtió en un instrumento del Ejecutivo para extender su control sobre el mismo.⁹

La ausencia de mecanismos de control y de asunción de responsabilidades permitió al Congreso aprobar numerosas leyes anticonstitucionales, como la ley de amnistía de 1995, que prohíbe la investigación y procesamiento de los crímenes contra los derechos humanos cometidos hasta la fecha por las Fuerzas Armadas. Otra de estas leyes fue la de interpretación de la Constitución de 1996, que permitió que Fujimori se presentase a un tercer mandato. El Tribunal Constitucional —

⁸ Julio Cotler, *ibídem*, 1995, p. 139.

⁹ *Ibídem*, p. 19.

que había dejado de funcionar desde el autogolpe hasta 1996— negó la aplicabilidad de dicha norma. Como consecuencia, el Congreso destituyó a tres de sus miembros en junio de 1997 (son siete en total), su presidente dimitió y desde entonces quedó inutilizada una de las instituciones más importantes de fiscalización del régimen político.

El Congreso se ha limitado a aprobar la legislación presentada por el Gobierno, sin ejercer sus facultades de control e investigación. Por otra parte, ha existido un círculo de asesores —como el propio Montesinos, ex asesor personal del presidente, y Absalón Vásquez, ex ministro y asesor en las elecciones presidenciales, en la actualidad congresista— muy cercano al presidente pero sin cargo oficial alguno, con extraordinarias parcelas de poder e inmune a los escasos sistemas de control del sistema político.¹⁰

Además de este control sobre los diferentes poderes, la designación de familiares y allegados del presidente y de Vladimiro Montesinos en los principales puestos de responsabilidad (de acuerdo con un claro sistema de clientelismo) produjo una fuerte desinstitucionalización de los poderes públicos, que dejaron de servir al Estado y a la sociedad para estar al servicio del régimen particular de Fujimori. Estos elementos condujeron al funcionamiento “informal” del Estado o, lo que es lo mismo, a “la captura de instituciones oficiales por parte del Gobierno”.¹¹

El control de los medios y de la oposición

El control represivo de los medios periodísticos es un instrumento al servicio de regímenes autoritarios. En el régimen de Fujimori se ejecutó una doble estrategia: por una parte, se reconoce formalmente la libertad de expresión y se acepta un cierto margen de prensa crítica y de oposición (el semanario *Caretas*, los diarios *La República* y *El Comercio*). Pero al mismo tiempo, se producen prácticas de acoso y extorsión que, junto con el establecimiento de altos impuestos y la ocultación de gran parte de la información, limitan el ejercicio de la prensa libre.¹² La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en 1998 a Perú en la lista de países del hemisferio con mayores restricciones a la libertad de expresión. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la existencia de una acción sistemática y planificada por parte de los organismos públicos hacia los medios.¹³

El Gobierno de Fujimori controla importantes medios de comunicación que contribuyen a la campaña de hostigamiento contra determinados periodistas y sirven de elemento de propaganda del poder y de manipulación de las masas. La

¹⁰ Coletta Youngers, “Deconstructing Democracy: Peru under President Alberto Fujimori”, informe presentado por el Washington Office on Latin America (WOLA), febrero de 2000, p. 20.

¹¹ Cotler, *ibidem*, 1995, p. 134.

¹² Conaghan, “Entre las amenazas y la complicidad: el Estado y la Prensa en el Perú de Fujimori”, *Tuesta Soldevilla*, *ibidem*, p. 270. Ver también Youngers, *ibidem*.

¹³ CIDH-OEA, “Informe sobre el Respeto de los Derechos Fundamentales en Perú”, 1999.

El régimen se ha servido de una calculada política de alianzas para afianzar su poder

ONG Transparencia denunció que, en noviembre de 1999, Fujimori apareció en antena un total de 26 horas y media, mientras que todos los candidatos de la oposición sumaban sólo 4 horas y 10 minutos.¹⁴

El sistema ha conducido también a la desestructuración de los partidos políticos, de los movimientos organizados de oposición y de cualquier iniciativa popular que ponga en tela de juicio el sistema de poder. Los partidos políticos, instrumentos democráticos fundamentales para la canalización de los intereses de la sociedad en el sistema político, sufrieron una de sus peores crisis a finales de los años ochenta, de la cual todavía no se han recuperado. Aunque los casos de corrupción e ineficacia jugaron un papel muy importante en el descrédito y desconfianza de la población, el régimen de Fujimori fortaleció este sentimiento al trabajar para la desinstitucionalización y desestructuración de estas organizaciones políticas.

Una característica del actual sistema de partidos es el abandono de las estructuras clásicas de organización y la proliferación de candidaturas independientes y movimientos explosivos, que nacen y mueren en las elecciones. Fujimori se ha servido del descrédito heredado para desinstitucionalizar esta organización política y evitar el surgimiento de líderes de oposición consolidados.

A su vez, ha promovido la movilización de la sociedad a través del desarrollo de organizaciones asistenciales y no gubernamentales, con el fin de paliar el efecto de las medidas de ajuste económico y reducir el descontento de la población. La política de lucha contra la pobreza ha sido una de las banderas de Fujimori para contar con el apoyo de la sociedad civil. Las demandas de ésta se han expresado parcialmente a través de estas organizaciones asistenciales. Esta cuestión plantea un desafío político tanto a las ONG locales como a las internacionales, en el sentido de colaborar o denunciar la tendencia a que las ONG sustituyan a los Estados débiles en sus responsabilidades.

Un equilibrio precario: la política de alianzas

El régimen se ha servido de una calculada política de alianzas para afianzar su poder, en función de dos necesidades prioritarias que se plantearon en el momento de alcanzar el poder:

- Superar la situación de debilidad y aislamiento de la que partió el Gobierno de Fujimori tras ganar las elecciones de 1990, ya que contaba con minoría en el Congreso y un notable grupo de oposición, el Fredemo de Vargas Llosa.
- Superar la debilidad crónica del Estado para hacer efectiva su capacidad coactiva y ejecutiva, y consolidar institucionalmente su poder personal y autoritario.

La participación de las Fuerzas Armadas en el sistema político fujimorista ha sido un elemento clave. En 1990 no era posible gobernar sin contar con la institución castrense, la única que funcionaba eficientemente, que contaba con una importante

¹⁴ Youngers, *ibídem*, p. 67.

carrera de intervencionismo político en el país. Además, el fenómeno de la subversión y del narcotráfico les confirió un extraordinario peso político en la sociedad y en el régimen político. No obstante, Fujimori consiguió que las Fuerzas Armadas se replegasen a los intereses particulares del binomio Montesinos-Fujimori.

Las fuerzas civiles cuentan con varios métodos para controlar el papel de esta institución en regímenes democráticos. El más utilizado en América Latina ha sido la cooptación, que consiste en otorgar una serie de prebendas (materiales, profesionales, corporativas) con el objetivo de contar con su apoyo y confianza. El Gobierno de García desarrolló este sistema, que fue asumido también por Fujimori pero con un fin diferente: García buscaba el apoyo del ejército; Fujimori, en cambio, aunque quería evitar un posible golpe de Estado y controlar las estructuras de la institución castrense, se orientó a convertir al ejército en una institución al servicio del poder. Si García había respetado el sistema de promoción y jerarquía interna, necesario para la estabilidad de la institución, Fujimori lo manipuló y lo dispuso a su favor¹⁵.

En virtud de la guerra antisubversiva, se aprobaron numerosos decretos que otorgaban mayores poderes a las regiones militares. El conflicto con Ecuador, en 1995, también reforzó la posición de las Fuerzas Armadas. El gasto militar en 1996 y 1997 subió del 2 al 3% del PIB.¹⁶ Pero al mismo tiempo se aprobaron decretos que aumentaron el control del Ejecutivo sobre el ejército. El objetivo era doble: mantener controladas a las fuerzas de seguridad y a la vez destruir su estructura institucional y cooptarlas, colocando en puestos clave a personas del círculo de Montesinos y Fujimori.

En 1991, la Ley de Situación Militar confirió al presidente la prerrogativa de nombrar a los altos mandos del ejército y retirarles antes de los 35 años de servicio que antes quedaban estipulados. Este mandato legal le dio capacidad discrecional para poner en puestos clave a figuras estrechamente relacionadas con él y Montesinos. Los militares que rehusaban adherirse a este sistema eran invitados al retiro. Con ello se redujo la "importancia de la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, dando lugar a nombramientos políticos".¹⁷

El primer beneficiado por este sistema de cooptación fue el general Hermoza, amigo personal de Montesinos, que llegó a ser jefe de las FF AA gracias a la modificación legal de los nombramientos. (El sistema de control era tan fuerte que, en 1998, fue destituido de su cargo porque empezaba a concentrar demasiado poder).¹⁸ Lo mismo sucedió con la mayoría de los compañeros de promoción de Montesinos, que ocuparon los principales puestos de responsabilidad dentro de la estructura militar.

La lucha contra el narcotráfico otorgó una nueva misión y más competencias a las Fuerzas Armadas, pero los casos de corrupción relacionados con la institución

¹⁵ Ver Enrique Obando: "Fujimori y las Fuerzas Armadas", en John Cabtree y Jim Thomas (eds.), *El Perú de Fujimori*, IEP, 1999.

¹⁶ Phillip Mauceri, "Prerrogativas de las Fuerzas Armadas en una Alianza Cívico-Militar en el Perú", en Tuesta Soldevilla, *ibídem*, p. 160.

¹⁷ Youngers, *ibídem*.

¹⁸ Sally Bowen, *El Expediente Fujimori*, Perú Monitor, Lima, 2000.

contribuyeron a desgastar más aún la profesionalidad de la estructura castrense. El sistema judicial, cooptado por el sistema, permitió la impunidad respecto a los crímenes contra los derechos humanos y a los casos relacionados con el narcotráfico.

De esta forma, se fue construyendo una red clientelar y mafiosa que sustentaba el régimen. El artífice de esta estructura “inteligente” fue el asesor personal del presidente, Vladimiro Montesinos, la cabeza *de facto* del SIN.

El poder en la sombra: el SIN

El Servicio de Inteligencia Nacional era una institución apenas importante antes de la llegada de Fujimori al poder. En 1987 contaba con 2.800 miembros y un presupuesto de 10 millones de dólares. Cuando se produjo su desactivación, en septiembre de 2000, tenía 70.000 agentes y un presupuesto de más de 600 millones de dólares.¹⁹ Con la llegada de Fujimori, se constituyó como elemento central en la estructura de poder y factor de referencia para entender la dinámica del sistema. Fujimori se sirvió de Montesinos como intermediario en sus relaciones con los poderes fácticos, en los que se sustentaba su régimen.

Tres fueron los objetivos de esta institución: vertebrar el sistema de cooptación, en el que las Fuerzas Armadas y el poder judicial constituyen elementos centrales; servir de instrumento de propaganda a través del control de los medios de comunicación y, por último, hacer de policía política²⁰ y de instrumento de extorsión y acoso de todos los opositores del régimen. A su vez, sirvió de trampolín para los propósitos de poder de Montesinos, que utilizó los temores respecto a la posibilidad de un golpe de Estado para ganarse la confianza del presidente. La intentona de golpe de 1992, liderada por el general Salinas y otros generales que habían sido obligados al retiro, “fortaleció el poder de Montesinos, puesto que proporcionó precisamente la clase de evidencia que requería para justificar la estrategia que había defendido”.²¹ La red de clientelismo que se creó en torno al asesor del presidente lo hizo, finalmente, indispensable para Fujimori.

Existen multitud de casos que relacionan a esta institución —y en particular a Montesinos— con la comisión de delitos contra los derechos humanos. En todos los ejemplos de intimidación, extorsión o chantaje, el SIN ha estado detrás. Ha funcionado como un aparato de represión enmascarado, en casos como el de las agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor La Rosa y Mariela Barreto, que fueron torturada y asesinada, respectivamente, por filtrar información que inculpaba a los servicios de inteligencia en varios casos de asesinato.

La ambivalencia de EE UU

La asunción de los principios de libre mercado le valió a Fujimori el apoyo de los empresarios, el sistema económico internacional y EE UU. Sus éxitos de los pri-

¹⁹ Francesc Relea, *El País*, 24 de septiembre de 2000.

²⁰ Youngers, *ibídem*.

²¹ *Ibídem*.

meros años le otorgaron una gran credibilidad y confianza, no sólo entre la población peruana sino entre los inversores extranjeros y organismos multilaterales.

El crecimiento económico alcanzó un 6,4% en 1993 y una media del 7,4% anualmente entre 1994 y 1997. Los impuestos recaudados aumentaron del 4% al 12%. Se pusieron en marcha programas de privatización y liberalización que generaron un monto de más de diez mil millones de dólares en inversión, desde 1991 hasta 1998. Se inició el pago de la deuda, que Alan García había suspendido, y se normalizaron las relaciones con los organismos financieros internacionales, que aprobaron en 1995 la reducción de la deuda externa de Perú.²²

El alineamiento de Fujimori con la comunidad financiera nacional e internacional fue un elemento más en la búsqueda de estabilidad del Gobierno. Sin embargo, a partir de 1998, Perú entró en una notable recesión económica. Esto provocó críticas, por parte de las organizaciones financieras, sobre la política económica de Fujimori y abrió el debate acerca de la conveniencia de un sistema autoritario para la estabilidad económica del país.

Las relaciones entre EE UU y Perú, desde la llegada al poder de Fujimori, estuvieron caracterizadas por la ambigüedad y la desconfianza mutua. Si bien Fujimori contó en muchas ocasiones con la complacencia de EE UU, las acusaciones de violaciones de los derechos humanos y el carácter autoritario del régimen provocaron actitudes ambivalentes por parte del Gobierno estadounidense. La figura de Montesinos fue un elemento de conflicto entre ambos países. No obstante, la estabilidad proporcionada por el régimen fujimorista en la región, su colaboración contra el narcotráfico y el seguimiento de las recetas neoliberales para un futuro acuerdo de libre mercado continental hicieron que EE UU aceptara este régimen.

Al ser la estabilidad el factor clave para Washington, cuando el régimen perdió credibilidad, en las elecciones fraudulentas de 2000, las críticas aumentaron. La postura de EE UU siempre había sido ambigua, y esto fue utilizado estratégicamente por el presidente peruano. Finalmente, la implicación de algunos miembros del Gobierno de Fujimori en un escándalo de tráfico de armas conectado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), provocó la retirada definitiva del apoyo de EE UU al régimen peruano, ya que este hecho ponía en peligro el Plan Colombia y la seguridad en la zona. La actuación del futuro Gobierno estadounidense será decisiva para apoyar un posible proceso de transición.

Los nuevos desafíos para Perú

El anuncio, el pasado 15 de septiembre, de la celebración de elecciones fue un signo del agotamiento del régimen. La política de alianzas comienza a ofrecer fisuras. La cooptación y complicidad de la cúpula de las FF AA ha provocado malestar en los cuadros medios y los militares retirados como ha quedado reflejado en el pronunciamiento del 29 de octubre a manos de una unidad militar del Sur, que cuestiona la autoridad del régimen fujimorista. A la vez, las estructuras finan-

*Las relaciones
entre EE UU
y Perú, desde
la llegada al
poder de
Fujimori,
estuvieron
caracterizadas
por la
ambigüedad
y la
desconfianza
mutua*

²² David Scott Palmer, "Democracy ant its Discontents in Fujimori's Peru", en *Current History*, vol 99, n° 634, febrero de 2000, pp. 60-61.

cieras critican la política macroeconómica del presidente Fujimori y acusan el funcionamiento informal del régimen.

Las denuncias de violaciones, abusos, intimidaciones, corrupción, negocios ilegales y chantajes han minado las estructuras del sistema. Existe una fuerte crisis de legitimidad, y éste es uno de los factores que conducen al colapso de los regímenes autoritarios (como ha ocurrido, pese a las diferencias, en Perú y Serbia en el mismo periodo). Las movilizaciones sociales y el descontento social aumentan, indicando el alejamiento de la sociedad respecto del régimen político. Los dos últimos escándalos, la Operación Siberia —en la que miembros de las Fuerzas Armadas aparecían vinculados al tráfico de armas— y el vídeo que mostraba a Montesinos ofreciendo dinero a un tráfuga, fueron elementos fuertemente destabilizadores.

La presión de EE UU en los últimos meses ha sido un factor decisivo en el colapso del régimen. Si bien la estabilidad del sistema se mantenía en parte, gracias a su aparente juego democrático, los últimos escándalos mostraron la naturaleza autoritaria y mafiosa del régimen. Al final, Washington no encontró en el régimen de Fujimori ni legitimidad ni formalidad democrática. No había ya ninguna razón para apoyarlo. Fujimori dejó de ser útil en la política de seguridad geoestratégica estadounidense. El escándalo de la Operación Siberia amenazó directamente uno de los pilares más importantes de la actual política estadounidense hacia América Latina: el Plan Colombia y su lucha contra el narcotráfico. Fujimori se ha convertido en un factor destabilizador no sólo para la región sino para el propio Perú, donde los grupos sociales se expresan colectivamente a favor de una apertura del régimen autoritario.

Son muchos los problemas que Perú deberá afrontar a corto, medio y largo plazo. Las protestas de la sociedad civil han sido decisivas para debilitar la estructura del poder autoritario. Ahora es el momento de que la oposición ofrezca a la población una alternativa fiable. El fin de Montesinos y de Fujimori, si es que éste no se reinventa de alguna forma, no asegura la desaparición de sus estructuras de poder.

Dada la posibilidad de que el presidente esté diseñando una estrategia para perpetuar el régimen, la oposición debería actuar con rapidez. Un golpe de Estado de la cúpula militar es improbable: no hay un contexto regional favorable (ni siquiera el procesamiento de Augusto Pinochet ha logrado sacar los tanques chilenos a la calle) y EE UU no apoya una opción de este tipo. La sociedad civil ha adquirido un protagonismo que podría llevar a choques con las fuerzas de seguridad, aunque es una sociedad civil fragmentada y con escasa capacidad organizativa. De todos modos, Fujimori se ha servido del temor al caos para garantizar su poder hasta las elecciones que se celebrarán en junio de 2001.

El futuro es incierto. La transición será compleja, debido a la informalidad del Estado y a la fragilidad institucional sobre la que se construyó el régimen fujimorista. La precariedad política actual se acentúa por la ausencia de un planteamiento alternativo sólido. Se teme —como indica Fernando Rospigliosi— que, una vez desaparecido el enemigo, se produzca la división y el conflicto entre los principales grupos de oposición. Si bien es importante la pluralidad, se impone crear el futuro régimen democrático sobre la base del consenso y la unidad. Una imagen

de confusión y desorganización de las fuerzas de oposición no haría sino beneficiar una nueva solución “mesianica”. Por ello es necesario que los movimientos de oposición trabajen en la consolidación e institucionalización de sus respectivos grupos y busquen un candidato de consenso.

Los desafíos de Perú a largo plazo, en caso de que se produzca efectivamente un proceso de transición, son todavía mayores: una nueva Constitución que ampare la pluralidad de la sociedad, la reconstrucción del sistema judicial y legislativo, la eliminación de la estructura clientelista de poder, el establecimiento de un sistema libre de prensa y la lucha efectiva contra la pobreza. Uno de los elementos más importantes en el futuro de Perú es el rediseño de las relaciones civil-militar. Es preciso devolver la autonomía a la institución castrense (sin que se conviertan en un Estado dentro del Estado), despolitizarla, asegurar su influencia en la transición y establecer un nuevo modelo de relaciones entre ambas esferas donde quede asegurada la profesionalización de las Fuerzas Armadas. También es preciso crear sistemas de responsabilidad por los crímenes cometidos contra los derechos humanos. El procesamiento de Montesinos, que en la actualidad se encuentra desaparecido en Perú, después de un mes esperando asilo político en Panamá, será una condición sustancial para el proceso de transición.

Otro elemento crucial es elaborar políticas que integren a los ciudadanos más excluidos en planes contra la pobreza y la desigualdad. Casi el 50% de la población de Perú vive bajo el umbral de la pobreza. La transición a la democracia, sin un proyecto contra la desigualdad en el ingreso, podría estar condenada al fracaso.

Todavía existe el peligro de que el proceso iniciado se revierta a favor de Fujimori y su red personal de poder. El anuncio de Fujimori no es más que el inicio de un período que puede durar años, pero ofrece una oportunidad única para que Perú retome el proceso de consolidación democrática, tras diez años de Gobierno autoritario y una historia casi completa de injusticia.

Posdata: Alberto Fujimori, tras varios intentos por estabilizar su posición, como la ruptura oficial con su ex asesor, la destitución de la cúpula militar y otros cambios en el poder judicial que reflejan la presión ejercida por la comunidad internacional y la sociedad peruana para que se lleven a cabo las reformas democratizadoras pactadas, ha presentado su renuncia el 19 de Noviembre, después de salir del país.

Montesinos, contra el que se han abierto causas por blanqueo de dinero, narcotráfico, contrabando de armas y asesinato, se encuentra desaparecido. Los últimos escándalos vinculados a éste, que implican directamente al expresidente, como las declaraciones de un narcotraficante colombiano afirmando haber financiado la campaña electoral de 1990, han precipitado la caída de Fujimori, que ante el temor de ser enjuiciado en su país ha preferido permanecer en Japón.

El cambio en la correlación de fuerzas políticas es también significativo. La oposición cuenta con una mayoría en el Congreso y se han puesto las bases para que un líder de la oposición, en la actualidad presidente del Congreso, Valentín Paniagua, lidere un gobierno de transición hasta las elecciones. Este sería el mejor de los escenarios para que las elecciones del 8 de Abril de 2000 se celebren bajo la consigna de la transparencia, y la justicia. 21 de Noviembre de 2000.